

10.15 horas, al que comparecieron el Sr. Abogado del Estado, la empresa SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ESTOPIÑAN, asistida del Letrado Sra. Lourdes Sánchez Gil, sin que compareciera D. MOHAMED AMAADOUR debidamente citado, según consta en el acta extendida. Abierto el acto el Sr. Abogado del Estado se afirma y ratifica en los hechos contenidos en el escrito de iniciación del proceso y alegando los fundamentos de derecho que estima de aplicación, contestando y oponiéndose a la representación de la contraparte, practicándose las pruebas documental, de interrogatorio del legal representante de SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ESTOPIÑAN y testifical consistente en la declaración de Dña. María José Simón Simón, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a las respectivas pretensiones y quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de 30 de junio de 2010 la Inspección de Trabajo actuante giró visita al centro de trabajo consistente en elementos para la retransmisión de eventos deportivos en sito en la Plaza de las Cuatro Culturas, de la localidad de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se comprobó que allí prestaba servicios por cuenta de la empresa SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ESTOPIÑAN, mercantil que realizaba el montaje de los elementos para la retransmisión de eventos deportivos, el trabajador MOHAMED AMAADOUR, careciendo de la preceptiva autorización administrativa para trabajar en España y sin figurar en situación de alta en la Seguridad Social.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, los hechos que se declaran probados han sido obtenidos, tras la valoración ponderada del conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero, se deduce del expediente administrativo aportado.

Con respecto al ordinal segundo, se deduce del propio expediente administrativo, corroborado sin género de dudas por la testigo, que llevó a cabo la inspección y constató los hechos que se relatan en el expediente, sin que las alegaciones del representante legal de SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ESTOPIÑAN de que no autorizó expresamente la presencia del trabajador en el centro de trabajo tengan fuerza suficiente frente al resto de material probatorio, del que se deduce la presencia del trabajador en lugar de acceso exclusivo a operarios de la empresa, con equipación de la misma y realizando las mismas tareas que otro trabajador de la mercantil en situación regular.

Por lo expuesto se constata que la demandada no ha practicado prueba alguna que destruya la presunción "iuris tantum" de veracidad de la que goza el acta levantada por los servicios de la Inspección de Trabajo.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, requiere la objetiva y personal comprobación de los términos en ella contenidos, no bastando a tal efecto las meras apreciaciones subjetivas, debiendo las mismas sentar hechos claros directamente conocidos por el inspector o mencionando las fuentes indirectas de conocimiento de modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ 1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]). En cuanto al significado de la misma, la presunción de certeza implica exclusivamente que la Administración queda relevada de justificar los hechos imputados al empresario o trabajador infractor, de forma que se está ante una presunción "iuris tantum" que podrá ser destruida mediante la oportuna probanza, suponiendo por tanto una inversión de la carga de la prueba.